



no transar

Órgano de Prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

¡PROLETARIOS Y PUEBLOS DE TODOS LOS PAÍSES OPRIMIDOS... UNÍOS!

Año 28 - Nº 203 (3ra. época)

Precio \$1000 - Solidario \$5000

12-05-2025

SE TIENEN QUE IR



¡Libertad a Carina Izaguirre!

5 de abril
1965*2025
VANGUARDIA
COMUNISTA
60 años
PRML*

Un préstamo para llegar a octubre

Desde sus inicios, el esquema económico estructurado por el gobierno nacional saca “conejos de la galera” para esquivar sus inconsistencias. La política económica libertaria tiene un objetivo primario: pisar el dólar para contener la inflación y llegar competitivos a las elecciones. Agotado el efecto del blanqueo de capitales de 2024 y con una peligrosa caída en las reservas durante el primer trimestre de 2025, Milei y Caputo debieron apurar un nuevo préstamo del FMI para seguir tirando. El interrogante está a la vista: ¿qué pasará después de octubre?

La aprobación del crédito del FMI por un total de USD 20.000 millones significó un primer desembolso en abril por USD 12.000 M, más USD 1.500 M otorgados por el Banco Mundial y USD 2.000 M de un REPO con bancos internacionales. El baño de dólares busca un efecto sobre dos variables: la deuda en pesos y las reservas del Banco Central.

En el primer caso, la llegada de dólares establece un colchón de reservas lo suficientemente grande como para tranquilizar a los capitales que operan en el mercado financiero local, pues garantiza cierta seguridad (al menos hasta agosto, según el JP Morgan) para la especulación con títulos en pesos, habilitando su continuidad. Esas operaciones rinden exorbitantes tasas de ganancia en dólares (8% a 27%, dice JP Morgan), siempre que haya dólares disponibles para cuando los inversores quieran bajarse de la bicicleta. Si perciben que esos dólares no están, como sucedió en marzo cuando las reservas del BCRA tocaron piso, dejan de comprar títulos en pesos (desfinancian al gobierno) y se pasan al dólar.

El préstamo del FMI llegó sobre la hora: durante los vencimientos de marzo y abril el gobierno se encontró con una fuerte resistencia de los capitales a renovar deuda (rollear, en la jerga) por el temor a una devaluación. Ante ello, debió ofrecer mayores tasas de interés, plazos más cortos y usar el Banco Nación para comprar el 90% de los títulos. Según un informe del Banco Provincia de Buenos Aires, durante el vencimiento del 24 de abril (con el nuevo régimen cambiario ya vigente) el gobierno debió echar mano a \$2,2 billones de las utilidades que le giró el BCRA al Tesoro, es decir, es la primera vez en la era Milei que el gobierno recurre a la emisión monetaria para pagar vencimientos de deuda.

Hacia adelante, en mayo y junio el gobierno vuelve a enfrentar grandes vencimientos de deuda en pesos que, de no lograr renovar, deberá pagar usando fondos que tiene “ahorrados”, con un doble riesgo: que volcar esos pesos a la calle aumente la inflación, o que los inversionistas usen esos pesos para comprar dólares, presionando la cotización hacia arriba. El resultado es importante porque el plan electoral del gobierno depende de la estabilidad de esas dos variables: inflación y devaluación.

Respecto a la segunda variable, la acumulación de reservas es el punto débil del plan económico desde hace un año, y sigue siéndolo incluso después del acuerdo con el FMI. El modelo de dólar barato -vigente desde hace un año- provoca un constante drenaje de divisas por diversas vías, lo que impide al Central acumular reservas, incluso a pesar de la recesión y el superávit comercial de 2024. Esa situación obligó al gobierno a recurrir a políticas económicas exclusivamente orientadas a la obtención de divisas (“puentes” de dólares) para impedir la bancarrota del modelo, como el mantenimiento del cepo cambiario, que impedía comprar dólares a la cotización oficial; el crawling peg (la devaluación

pautada del 1% mensual), que hizo atractivo el carry trade y atrajo dólares para la especulación en pesos; el dólar blend, que garantizó la liquidación de la cosecha; y el blanqueo de capitales, que trajo una inyección récord de depósitos en el sistema financiero.

Como señalamos en la edición anterior de no transar, esas fuentes artificiales de dólares se agotaron a fines de 2024: entre diciembre y marzo se aceleró la caída de las reservas hasta un punto crítico. Al cierre de marzo, las reservas netas fueron negativas por USD 11.500 millones, incluso por debajo de lo dejado por Sergio Massa en dic-2023. El descalabro a la vista obligó a apurar el acuerdo con el FMI, sin el cual el modelo de Milei y Caputo hubiera saltado por los aires. A cambio, el gobierno debió abandonar el crawling peg, flexibilizar el cepo cambiario y establecer un esquema de flotación del dólar entre bandas (\$1000 a \$1400, con 1% de ampliación mensual). Si bien el acuerdo lo permite, el gobierno se comprometió a no comprar dólares mientras la cotización esté por arriba de los \$1000 ni venderlos por debajo de \$1400. Con el BCRA sin mandar dólares dentro de la banda, el gobierno busca empujar la cotización hacia el límite inferior (\$1.000) para bajar la inflación, pero con ello se auto impone un fuerte obstáculo para la recomposición de las reservas del BCRA, pues es poco probable una disminución del dólar hasta los \$1000. Además, la banda inferior baja a razón de 1% por mes, haciendo cada vez más difícil llegar al piso, mientras que la persistencia o aceleración de la inflación empuja al dólar hacia arriba.

El asunto de las reservas es importante por dos razones. En primer lugar, la recomposición de las reservas es una de las condicionalidades centrales del acuerdo con el FMI: en junio, Caputo debe mostrar reservas netas negativas por USD 2.600 millones y, hacia diciembre, unos USD 1.800 millones netos positivos. Sin entrar en detalles respecto a las reglas del acuerdo sobre cómo se acumulan y contabilizan las reservas, se puede afirmar que el Central necesita comprar USD 4.600 M para junio y entre USD 9.000 y USD 10.000 millones hasta fin de año. Con las limitaciones de la banda cambiaria, esa cifra parece inalcanzable. En el medio, el vencimiento de bonos en dólares por USD 4.500 millones en julio amenaza el precario estado de las reservas, pues el gobierno sólo consiguió USD 2.000 millones mediante un REPO bancario. El resto deberá salir de las arcas del BCRA, un movimiento autorizado por el FMI pero no recomendable dado que aleja a las reservas de las metas establecidas. En esta misma línea también se anota la sugerencia de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, de una línea de crédito directa del gobierno norteamericano, en caso de urgencia.

Segundo, si bien es cierto que el Fondo puede emitir un waiver y perdonarle a la Argentina el incumplimiento, la acu-

mulación de reservas no es solamente una meta formal contenida en el acuerdo con FMI, sino un dato clave que miran los inversores internacionales y los tenedores de deuda. Parece cierto que hasta octubre el gobierno está blindado por el crédito del Fondo, pero de allí en adelante, si la posición de reservas no mejora, es posible que la Argentina no pueda generar suficiente confianza internacional sobre su capacidad para pagar la deuda con el FMI y los bonistas privados. Eso dificultará el retorno del país a los mercados voluntarios de crédito, circunstancia necesaria para tomar préstamos del sector privado y renovar los vencimientos de la deuda externa, que se ponen picantes en 2026 (USD 18.700 millones) y 2027 (USD 20.300 millones). De hecho, el propio acuerdo con el FMI indica que Argentina debe reducir el riesgo país (por debajo de 400 puntos) y volver al mercado internacional a principios de 2026, una forma sutil de decir que no habrá otra ronda de endeudamiento con el organismo que rescate al gobierno sobre la hora.

Por otro lado, aun respetando los criterios de la banda cambiaria, el gobierno sigue apostando por una apreciación del tipo de cambio, es decir, apuesta por un dólar lo más cerca posible del piso de la banda (\$1.000) para mantener a raya la inflación, que amagó con una suba del 3,7% en marzo y, según consultoras, en torno al 3% para abril. Eso requiere el ingreso de un flujo estable de dólares que empuje hacia abajo la cotización en un contexto donde la tendencia es la inversa: una constante salida de dólares, reflejada en un importante déficit de la cuenta corriente cambiaria (USD 1.674 M en marzo, USD 4.190 M en el primer trimestre), por el crecimiento de las importaciones, los servicios y el turismo externo, el estancamiento de las exportaciones y los pagos de intereses de la deuda. Si bien es esperable una morigeración de esa tendencia con el nuevo régimen cambiario, el fin del dólar blend y un oficial más elevado, el flujo negativo de divisas no deja de ser preocupante y el mes de mayo evidenciará el desempeño del nuevo esquema.

Al respecto, el gobierno saca nuevos conejos en la galera con la mira puesta en el ingreso de dólares. Por un lado confirma el fin de la suspensión de las retenciones al agro el 30 de junio, intentando obligar a los exportadores a liquidar la cosecha antes de esa fecha, si quieren aprovechar el beneficio. Además, flexibiliza el acceso de capitales extranjeros al mercado cambiario local, facilitando el carry trade... con la condición de no retirar el capital hasta después de las elecciones. Y, para su siguiente truco, Milei y Caputo buscan habilitar las transacciones en dólares por montos limitados (entre 100.000 y 200.000 dólares) sin rendir cuentas ante los organismos fiscales, con el objetivo de promover que la gente saque los dólares del colchón en una especie de mini blanqueo permanente.

Ahora bien, incluso si consigue el flujo de dólares necesario para acercar la cotización del dólar oficial al piso de \$1.000, con ello el gobierno provocaría una situación de atraso cambiario. Ello, porque la caída de la cotización no obedecería a una tendencia natural de la economía, como una demanda genuina de pesos o un aumento de la productividad del país, sino como consecuencia de las iniciativas del gobierno orientadas a ese fin y del mantenimiento del cepo flexible y otras regulaciones cambiarias. Tal atraso cambiario sería letal para los sectores productivos locales incapaces de competir contra productos importados a bajo precio, creando un riesgo de disminución de la actividad económica (quiebras, despidos). Además, afectaría a los sectores exportadores, incluso los más competitivos (energía, agro y minería), lo que frenaría las exportaciones que traen dólares al circuito local y, por añadidura, a las reservas del BCRA. Finalmente, implicaría una tendencia a incrementar las importaciones, pues con ese dólar es más barato importar que producir localmente, y a aumentar los gastos en el exterior (servicios, turismo, etc), como se observó en el primer trimestre de 2025. En definitiva, cuánto más se acerque el dólar a la banda inferior, habrá más demanda y menos oferta por parte del sector privado, por ende menos chances de llegar a la circunstancia del BCRA acumulando reservas.

La riesgosa apuesta del gobierno para llegar competitivo a las elecciones puede salir bien o mal, leída en sus propios términos. Ahora bien, ganen o pierdan en octubre, permanece en pie el riesgo de terminar el 2025 sin una recomposición de las reservas, con un dólar barato que frena el crecimiento económico y provoca déficit en la balanza cambiaria, sin acceso a los mercados internacionales y agotada la vía de recurrir al FMI como prestamista de última instancia.

Finalmente, el acuerdo con el FMI incluye un sendero de política económica con cambios estructurales en diversos campos: reforma impositiva, laboral, jubilatoria, desregulaciones y privatizaciones de toda clase y un aumento del superávit primario (es decir, más motosierra en el gasto público). El trazo fino de las reformas estructurales se debatirá en el último tramo de 2025, tras las elecciones legislativas, y su implementación a partir de 2026: otro favor del FMI para que los perjuicios del acuerdo no impacten en las chances electorales de la administración libertaria. No obstante desconocer su contenido concreto, se trata de reformas orientadas a seguir inclinando la distribución del ingreso a favor del capital.

El cuadro configurado por el gobierno, no obstante su fragilidad, es una declaración de guerra contra la clase trabajadora y el pueblo. Ignorarla es condenarse a la derrota: hay que dar la batalla hasta que esto se termine.

David Paz



Luchar para derrotarlos y que se vayan

El nuevo acuerdo con el FMI le dio aire al gobierno. En lo político, le permitió retomar cierta iniciativa en un año en que venía de un descalabro detrás del otro. En lo económico, colabora con contener la inflación tras la suba sostenida de los primeros meses. Se trata de un plan para administrar el corto plazo, en la expectativa de llegar competitivos a las elecciones de octubre.

Si la deuda que había contraído Macri ya era impagable, esta nueva deuda es más impagable todavía. En la mano que dio Trump para aprobar el crédito se adivinan intereses estratégicos de los yanquis en nuestro país, relacionados a recursos naturales, bases militares y el ataque a las posiciones de China. Es decir, a cambio de la plata del Fondo la Argentina se somete a una entrega a lo grande.

El rumbo del gobierno va a seguir profundizando las contradicciones por arriba. El gran ganador con el plan libertario sigue siendo el capital financiero. Con la tasa de interés en pesos más alta que el dólar, el carry trade seguirá atrayendo capitales especulativos. Es lo que recomienda hacer JP Morgan en su último informe, aclarando que el plazo prudente para llevarse la plata del país es entre agosto y octubre. Los grandes productores agrarios liquidan cosecha para cubrir costos y ante la amenaza de mayores retenciones, pero avisan que el dólar está demasiado bajo. La renovación de autoridades de la UIA anuncia una postura de mayor confrontación de los industriales frente al gobierno, que viene atacando al sector, en el discurso pero sobre todo con una apertura de importaciones que viene destrozando a la industria local. La insistencia de Macri porque el PRO no se diluya es una expresión en la política de que hay fracciones del gran capital que buscan interlocutores que puedan expresar mejor sus intereses.

Se agota la paciencia

Por abajo, el acuerdo va a traer más motosierra. El gobierno quiere avanzar por ley en una reforma laboral que ya se viene implementando de hecho. Van por los convenios colectivos de trabajo. Vuelve a sonar con fuerza el tema de la reforma previsional, en tiempos en que los jubilados de la mínima -con bono incluido- subsisten con \$366.481 y quienes cobran la PUAM están en \$307.189. Mientras tanto, las condiciones de vida se siguen pauperizando. El consumo lleva 15 meses de caída. La quita de subsidios hace que todos los meses haya un aumento nuevo en las tarifas.

Milei le viene haciendo la guerra a los trabajadores. El gobierno acaba de fijar por decreto el salario mínimo en \$302.600 en abril hasta llegar a \$322.000 en agosto. Teniendo en cuenta que la canasta básica está arriba de \$1.100.000, una familia tipo debería te-



ner casi cuatro salarios mínimos para no ser pobre.

Por más que dibujen números, la pobreza no solo es un problema de trabajadores informales, sino que también alcanza a los registrados. En lo que va del año, el salario perdió un 2,2% frente a la inflación; en 2024 había cerrado un 37% abajo. Así las cosas, el gobierno pretende imponer paritarias de uno o dos puntos mensuales, amenazando con no homologar las que cierran por arriba de su pauta, como los casos de Gráficos de provincia de Buenos Aires o de Comercio

En este punto es interesante analizar la postura tomada por el eterno oficialista Armando Cavallieri. El SEC y las cámaras del sector acordaron un aumento salarial de 5,4% en tres tramos; ciertamente más que modesto, pero por encima del techo del gobierno, que a través de la Secretaría de Trabajo convocó a una reunión para revisar el acuerdo, argumentando "razones de orden público". Comercio rechazó ese llamado y declaró el estado de asamblea.

Más allá de cómo se desarrolle ese conflicto, es una señal de que la cúpula de la CGT, a diferencia de su conducta del año pasado, le viene poniendo reparos al gobierno libertario. Su motivación principal no es luchar por los trabajadores, ya que estuvo casi todo el 2024 dejando pasar despidos, precarización laboral y salarios a la baja. A través de ella interviene un sector del empresariado que con el plan libertario pierde más de la cuenta. Y se trata también de una dirigencia que sabe acomodarse cuando percibe malestar por abajo. La huelga de colectivos de comienzo de mes, si bien estuvo mediada por el problema de los subsidios, mostró la bronca creciente de los choferes por los bajos ingresos. Asimismo, el paro general del 10 de abril fue masivo. Son indicadores de un estado de ánimo entre los trabajadores, que vienen amasando el malestar frente a las consecuencias de la política de Milei y su casta.

Que la burocracia rompa la tregua con el gobierno, aunque sea parcialmente, es una buena noticia en la medida en que ofrece mejores condiciones para la lucha. Pero confiar en su dirección sería suicida. Es el combativismo el que tiene que abrirse paso, empujando la pelea, haciendo punta allí donde tiene condiciones y yendo al encuentro de los sectores que desde cada identidad o pertenencia quieren darle despliegue a sus ganas de luchar.

Las elecciones y la calle

El cronograma electoral que arrancó el mes pasado viene ratificando que LLA no es una fuerza nacional, y que vivir de prestado tiene sus consecuencias. Fue lo que pasó en Santa Fe, en donde el gobernador Pullaro se impuso ampliamente. Se trata de un mandatario de buena llegada al gobierno, que viene trabajando con Patricia Bullrich el tema represivo bajo el manto de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, aprovechó las elecciones constituyentes para diferenciarse de los libertarios, cuya lista quedó bastante abajo. Las buenas noticias vinieron de Salta, en donde el candidato libertario hizo una buena elección en la capital, y en Chaco, en donde se subieron al caballo del gobernador radical Zdero. El resto del interior no proyecta grandes resultados. Si bien es un hecho que preocupa al sector de Karina Milei y los Menem, por ahora se impone el criterio de Santiago Caputo de que las paradas en CABA y provincia de Buenos Aires son las que proyectan el escenario de octubre.

Junto a esta interna libertaria, se viene hablando mucho de cuán cerca o cuán lejos está el acuerdo entre LLA y el PRO, recientemente ensuciado por el desencuentro en el tratamiento de ficha limpia. Si bien son temas para seguir de cerca, lo principal de estas elecciones es que se están desarrollando en un marco de crecimiento de la movilización popular, expresada en luchas en donde todavía prima la dispersión, pero que van configurando un escenario de hartazgo. Para un sector muy grande del pueblo, son un canal para expresar su repudio a la barbarie libertaria.

El gobierno llega en peores condiciones de lo que quisiera. Es cierto que cuenta con el oxígeno del acuerdo con el Fondo, pero a largo plazo su perspectiva es sombría. En este marco, los resultados electorales arrojarán datos a tener en cuenta, pero menor determinante de lo que se pretende hacer creer. Lo decisivo será si la lucha del pueblo puede derrotar en las calles al ajuste de Milei.

La táctica electoral tiene que servir para que el castigo al gobierno abone el escenario principal de la pelea contra su plan, el escenario callejero. En las elecciones hay que golpear al gobierno desde un programa que ponga como centro la necesidad de suspender los pagos al FMI, nacionalizar la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos, medidas que deben ser acompañadas de un aumento de emergencia para salarios, jubilaciones y ayuda social, el castigo a los monopolios que aumenten precios arbitrariamente o acaparen productos, el fortalecimiento de la educación y la salud públicas y de la defensa de las libertades democráticas. Junto con este programa, es fundamental darle forma a la fuerza social que pueda luchar por imponerlo.

En esta dirección, de cara al trabajo hacia las legislativas nacionales, en cada distrito el PRML acompañará críticamente a las listas que mejor expresen esta orientación, o votará en blanco allí en donde considere que aún no hay condiciones.

Para resolver la cuestión de fondo, seguiremos trabajando en el impulso a la confluencia hacia el paro activo nacional para que se vayan, planteando la necesidad de una coordinadora nacional de la resistencia y las luchas, que tiene que pujar por dirigir esa unidad, sin sectarismos y sin medias tintas. En el año de su 60 Aniversario, el PRML sostiene el proyecto revolucionario que en 1965 nació con Vanguardia Comunista, defendiéndolo en todos los terrenos de la lucha de masas.

Agustín Damaso

Causa Villazo

La causa en la que se investiga la represión al Villazo inició el 3 de noviembre de 2023 en el Tribunal Federal número 1 de Rosario. Participan en la querrela os abogados de Apdh Rosario, quienes lograron llegar a la causa luego de diez años de instrucción, consiguiendo sacarla de los tribunales federales de Comodoro Pi. Están en representación de 69 víctimas querellantes, en contra de 25 imputados: dos civiles altos directivos de la empresa Acindar, un jefe de inteligencia del ejército, 20 ex policías federales, un exprefecto, un ex policía integrante de la brigada "los pumas".

El Villazo y su represión

En 1970 se generó en Acindar Villa Constitución una pelea por reclamos salariales -con una intervención destacada de Vanguardia Comunista- que fue derrotada por la patronal, despidiendo a compañeros de la agrupación GODA (Grupo Obrero del Acero). Estos, lejos de retroceder, avanzaron junto a obreros combativos del acero, el Movimiento de Recuperación Sindical y la Lista 7 de Septiembre, para conformar la Lista Marrón. Con asesoramiento de cuatro abogadas de Vanguardia Comunista -Merella Rojo, María Angélica Gastaldi, Lucia Acef y María Dardoso- en las elecciones de 1973 la Marrón conquistó la mayoría de los delegados y la comisión interna.

Esto fue desconocido por la UOM a nivel nacional nombrando a un interventor que, luego de algunas provocaciones, fue increpado duramente por algunos obreros, lo que a posteriori derivó en despidos y detenciones. A partir de estos actos los obreros ocuparon la planta tomando de rehén a personal directivo y jerárquico para evitar la represión. A la medida se plegaron los trabajadores de las metalúrgicas Metcon, Marathon, y Villber, además de recibir el apoyo de ferroviarios, textiles, comerciales y demás sectores de la ciudad.

El hecho derivó en una rebelión popular, ya que en solidaridad todos los sectores llamaron a la huelga y convocaron a una concentración, el 16 de marzo del 74, con 12 mil personas movilizadas. Los compañeros despedidos fueron reincorporados, y en las elecciones la lista Marrón ganó con más del 64% de los votos la dirección sindical.

El 20 de marzo de 1975 llegaron las represalias. Las fuerzas represivas movilizaron más de 4.000 efectivos, sumados a las patotas sindicales de la UOM. Con una invasión espectacular en la madrugada, de más de 1 km de vehículos, en los primeros dos días se produjeron 150 detenciones y 15 asesinatos. El ministro de Interior del gobierno de Isabel Perón, Alfredo Gómez Morales, lo denominó "operativo serpiente roja del Paraná". Detuvieron a la comisión directiva de Acindar y dirigentes ferroviarios y marítimos junto a otros gremios que habían apoyado a los obreros.

Al día siguiente los obreros decretaron la huelga de brazos caídos, que derivó en una reunión de más de 10 mil trabajadores, donde también fueron reprimidos y dejando un obrero muerto. A lo que se sumaron atentados con bombas en las casas de los obreros y balaceras indiscriminadas, con al menos 50 muertos en ese periodo. El comité de huelga sostuvo la medida por 66 días, levantándola tras la asamblea del 17 de mayo 1975.



La represión contó con la activa participación de Acindar, que aportó vehículos y pago de sobre sueldos a quienes estuvieron a cargo de los operativos.

No olvidamos ni perdonamos

Luego de un proceso largo y de mucho trabajo se están llegando a las instancias finales del juicio, con acompañamiento de muchas organizaciones del pueblo que están pendientes de cuál va a ser la sentencia de la justicia para estos actos de represión salvaje que se dieron en Villa Constitución sobre los trabajadores y sus familias.

Una causa que demoró una década en que diera comienzo al juicio, una búsqueda de justicia sobre un periodo constitucional de nuestro país, pero donde queda claro el rol del gobierno y el estado junto a empresas para atacar la organización obrera, que venía demostrando que otro proyecto de país, con los trabajadores a la cabeza, era posible.

La salida de fondo a la crisis económica y social que vivimos hoy, está en tomar las banderas revolucionarias de la generación del 70. Banderas que con humildad y firmeza el PRML hoy sigue haciendo flamear, reivindicando siempre a los compañeros que nos precedieron y que dieron todo en esta larga marcha del pueblo trabajador.

Alfredo Jáuregui

Camaradas de Vanguardia Comunista Detenidos-desaparecidos en abril

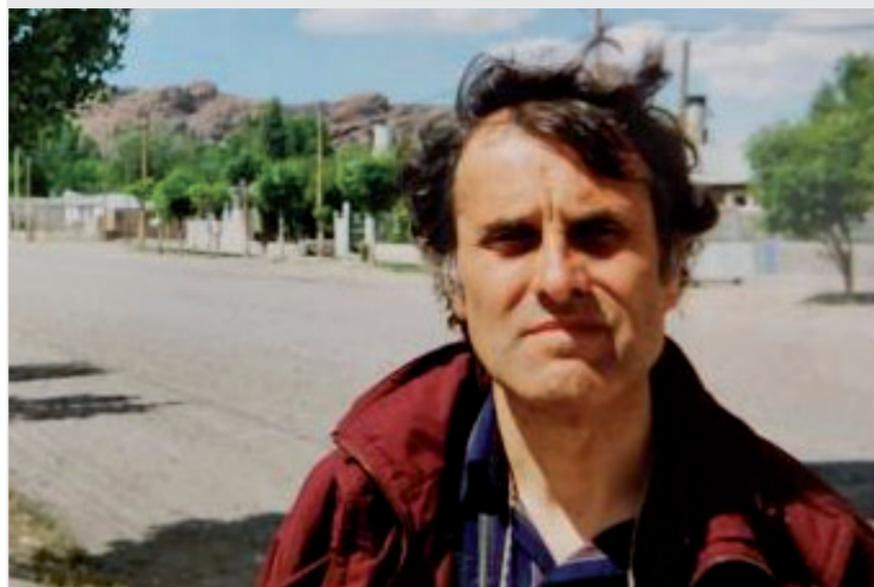
¡PRESENTES!

Carlos Miguel Sfeir

17 años, militante secundario, asesinato por la represión del "Devotazo", el 25 de mayo de 1973



A un año de su partida Camarada Oscar PRESENTE!





Carina Izaguirre con domiciliaria

Al final del mes pasado, la compañera de la CUBa-MTR de Gualeguachú Carina Izaguirre fue trasladada a su domicilio para continuar la detención. Carina está presa desde diciembre del año pasado, y si bien continúa en esa condición, es un avance que haya podido volver a su casa.

Carina está procesada por extorsión, amenazas y usura; en los fundamentos de su acusación, el juez federal Hernán Viri menciona a otras compañeras de la CUBa-MTR, tanto de Gualeguaychú como de otros puntos del país; deja claro así que de lo que se trata es de perseguir a una organización que siempre se plantó en la calle, represalia política de la que el responsable principal es el intendente libertario Mauricio Davico, en un contexto de represión y persecución generalizadas contra el movimiento piquetero combativo.

Seguiremos luchando por la libertad y la absolución de Carina, defendiendo el derecho de los más humildes a organizarse para luchar.

Corresponsal

Discapacidad en crisis y en lucha

Desde el inicio del gobierno de Milei se implementó un plan de ajuste drástico que impactó a diversos sectores, entre ellos el área de discapacidad, la cual atraviesa una profunda crisis. Esta situación se manifiesta en retrasos en el pago de prestaciones, recortes presupuestarios y la negativa por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnolo y del ministro de salud Mario Lugones, de convocar a la mesa del Directorio del Sistema Único de Prestaciones para actualizar los aranceles de las mismas. Esta crisis afecta gravemente a las personas con discapacidad, a sus familias y a las y los trabajadores del sector. Están en riesgo las pensiones no contributivas (PNC), el empleo en los talleres protegidos y los servicios esenciales para las personas con discapacidad está al punto del colapso. Ante todo esto, crece la organización de todos los afectados para dar pelea.

Si bien el sistema de prestaciones en el área de discapacidad arrastra una crisis de años, la LLA la profundizó comenzando con el vaciamiento de la ANDIS y el despido de 165 trabajadores en febrero de 2024. Seguido a esto, como no hubo presupuesto 2024, el gobierno dispuso el mismo presupuesto que en 2023 (siendo el más bajo en la historia de la ANDIS), asumiendo una inflación del 60% cuando fue de más de 210%. Después de más de un año de gobierno se profundizaron las históricas condiciones de precarización en las que miles de profesionales desempeñan sus tareas. El valor de las prestacio-

nes se desplomó, licuando por completo los ingresos. A modo de ejemplo, el último aumento registrado fue de apenas un 0,5% en diciembre de 2024, una cifra claramente insuficiente frente al deterioro generalizado del poder adquisitivo.

Prácticamente todas las obras sociales y prepagas pagan con un retraso de 3 meses o más, cada vez es más difícil obtener una autorización para el inicio de un tratamiento, y muchas veces los otorgan con menos sesiones semanales de las indicadas. Muchos centros de inclusión o terapéuticos están al borde del cierre o recortando horas de prestación con la posibilidad de que sus profesionales se queden sin trabajo o pierdan aún más ingresos. Con el aumento del precio del combustible, se atrasaron los aranceles a los transportistas de personas con discapacidad.

En los últimos meses también, el gobierno convocó a miles de personas para revisar si poseen todos los elementos para convalidar su Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Les envió una carta que les exige renovar estudios para evaluar si podrán o no mantener el beneficio, incluso cuando se las habían otorgado por varios años hace tan solo algunos meses. El procedimiento, además de vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, está plagado de impericias y con el vaciamiento de la salud pública y la falta de turnos en las obras sociales, muchas veces las personas tienen que pagar de su propio bolsillo los estudios, usando parte de una pensión absolu-

tamente devaluada, ante la fecha de la convocatoria asignada. Esto genera incertidumbre, porque no solamente se pierde el dinero de la pensión, sino que eso implica también dejar de recibir la atención del programa federal de salud que se llama Incluir Salud. Para fines de este año, el gobierno tiene la meta de recortar alrededor de 400 mil pensiones por invalidez laboral, un tercio del total de los beneficiarios actuales, casi el doble de la que había planificado en un primer momento. El recorte de unos 900 mil millones de pesos, va en línea con su meta de "ahorro" fiscal, es decir de ajustar para abajo y apagarle al Fondo. Esta situación emparenta la lucha con las movilizaciones que vienen llevando adelante las y los jubilados, por eso es que se vienen desarrollando entrecruces solidarios, por ejemplo, en la CABA.

El empleo en los Talleres Protegidos, gestionados a través de ONG'S donde trabajan miles de personas con discapacidad, también está en riesgo. El Estado apenas les paga 28.000 pesos mensuales desde el año 2023 y encima no abona los salarios desde hace cuatro meses.

La crisis del sector es a nivel nacional. Así las cosas, se comenzaron a llevar adelante asambleas para visibilizar el problema y dar pelea, en unidad entre las personas con discapacidad, las familias y los trabajadores, en cada provincia con distintas características. El 14/4 hubo un paro de los trabajadores de discapacidad y una movilización a Plaza de Mayo, reclamando un au-

mento de presupuesto para el área que se replicó en algunas ciudades. El día 30/4 hubo una nueva concentración, en Congreso esta vez, previo a la reunión conjunta de comisiones que emitió un Dictamen de Mayoría para la declaración de Emergencia en Discapacidad. Se está a la espera de que otorguen fecha de tratamiento en el Congreso, pero la ANDIS ya sacó un comunicado en contra de la ley y del aumento para el sector, que fue ampliamente repudiado por las asambleas en lucha que se disponen a una nueva movilización a la ANDIS para el día 13/5. Es posible que la Ley de Emergencia que nuclea al sector a dar pelea no tenga viabilidad, lo que lleva a poner la atención en como seguir la lucha, atentos a los conflictos que puedan profundizarse, dado que la crisis en discapacidad es alarmante estando en juego las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad y miles de puestos de trabajo.

El sector está en pie de lucha y necesita toda la solidaridad posible, a la vez que empujar a la unificación de las peleas en curso y seguir apuntando al paro nacional con la perspectiva de que Milei se tienen que ir. La situación actual pone de manifiesto que el gobierno está postrado ante el FMI y sosteniendo un dólar barato para ganar las elecciones, llevándose puesto a quien haga falta. El pueblo, entonces, tiene que llevarse puesto a este gobierno de cínicos, dinosaurios, fachos y discriminadores.

Octavio Ruiz

Misiones

Productores rurales en lucha

Se intensifica la lucha de los productores yerbateros en Misiones frente a la crisis generada desde la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por Javier Milei. Desde fines del año pasado crece la pelea frente a la crisis generada con la firma de este decreto que elimina la normativa que daba la facultad al INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) de fijar los precios de venta de la materia prima.

Esta medida característica del "liberalismo" pro monopolístico que profesa el gobierno nacional lo que hace es pulverizar la competencia frente a los grandes grupos y así genera una mayor concentración de las ganancias desde el sector industrial y comercial en el negocio de la yerba mate en detrimento de los productores locales. Si tomamos que en 2024 se cosecharon 100 millones de kilos de yerba mate, y que desde el DNU los grandes fijadores de precios empezaron a pagar hacia finales de marzo por lo menos \$200 menos por cada kilo, estamos hablando de una pérdida de 200 mil millones de pesos para este sector.

En Misiones la yerba mate es uno de los pilares de la economía provincial y de ella dependen miles de trabajadores, principalmente los productores locales. La baja de los precios a los cuales los grandes secaderos compran a los productores está tocando actualmente los \$100 por kilo en una tendencia que sigue bajando. Esto ha generado que muchos de ellos directamente abandonen la producción por no poder afrontar los gastos que implica, otros directamente dejando la producción sin cosechar hasta el año que viene y afrontando las dificultades que esto implica y otros que no tienen la posibilidad se ven obligados a vender igual antes de que siga bajando el precio. Además en todos los casos la baja de los precios de compra al productor genera no solo la quiebra de los mismos, sino también trae consigo en muchos casos la precarización

laboral de los tareferos, trabajadores rurales a los cuales la paga también les viene bajando, y en otros casos ni siquiera consiguen dónde trabajar durante esta temporada, lo cual golpea a miles de familias al no contar con este ingreso complementario.

Como en tantas otras ramas el gobierno libertario privilegia a los sectores concentrados de la economía dejando desprotegidos a los pequeños y medianos productores, así como a las familias y trabajadores. No promueve su desarrollo, lo cual se ve reflejado en el constante desfinanciamiento de dependencias vinculadas con la agricultura familiar, soberanía alimentaria, agroecología, entre otros, que con sus límites permitían pensar en un desarrollo más equitativo y amigable con el ambiente.

El conflicto comenzó a escalar cuando comenzaron los reclamos y bloqueos en las puertas de los grandes secaderos a los cuales los productores le venden la cosecha de hoja verde de yerba. Grandes centros de acopio que además llenaron sus depósitos y se "stockearon" con yerba a bajo costo proveniente de Paraguay y Brasil después de la apertura de las importaciones como maniobra para especular. El mes pasado los productores llegaron en tractores desde diferentes puntos de la provincia hasta un puesto de Rentas a la cual llaman la "aduana paralela" en el límite con Corrientes y que es desde donde se termina dirimiendo todo el negocio. Allí estuvieron hasta recibir



una orden de desalojo que culminó con varios detenidos.

Esta situación recuerda a lo vivido por el sector en el 2000-2001, cuando con decretos de desregulación que luego eran acompañados de disposiciones para importar productos de la canasta básica a precios más bajos que lo producido localmente, la rebeldía del sector en la provincia empalmó con la del resto de los sectores afectados por la crisis de entonces.

En los últimos días el reclamo se trasladó desde los cortes de ruta hasta la capital provincial Posadas. Se palpita la posibilidad de un nuevo tractorazo y se sostiene la lucha por la supervivencia del sector, buscando empujar los precios de compra hacia arriba en la pulseada contra los grupos concentrados, buscando llegar a un precio mínimo de

\$420 por kilo de hoja verde y por otro lado para evitar un inminente cierre del INYM que está acéfalo y prácticamente sin funciones. Presionando a su vez al gobierno provincial de Passalacqua, que lejos de ponerse a la cabeza por la defensa de los intereses de su región, se mantiene al margen y permite que el gobierno nacional -del cual es un opositor "responsable", es decir colaborador- avance haciendo quebrar a pequeños y medianos productores y concentrando aún más la producción en pocas manos.

Todo el apoyo a los productores en su lucha contra la prepotencia de los monopolios.

Néstor Ingaramo

Crece los ataques contra los trabajadores

Nunca fue más gráfica la expresión "salario mínimo", ya que su monto está por debajo de lo imaginable. Con una canasta básica que supera el millón de pesos, el gobierno de Javier Milei fijó el salario mínimo vital y móvil en \$308.000 para mayo y \$322.000 para agosto. En el caso de los trabajadores jornalizados, las sumas son de \$1.513 y \$1.610 por hora.

Las irrisorias cifras fueron decididas por decreto, ya que la reunión del 29 de abril del Consejo del Salario no llegó a un acuerdo. Sin embargo, se trata de números cercanos a la expectativa patronal: en dicha reunión, las cámaras empresarias habían planteado \$306.500 para mayo. Así, el salario mínimo quedó lejos incluso del reclamo más que medido de la CGT y la CTA, que plantearon llevarlo a \$657.503 para mayo.

Así, el gobierno libertario profundiza su decisión de atacar los ingresos de

los trabajadores a motosierra limpia. Otro ejemplo de esta política es su posición frente a las paritarias, poniendo un techo de 1 punto de aumento por mes, y amenazando con tirar atrás los acuerdos que estén por encima. Ya hay acuerdos paritarios que están con ese conflicto en puerta. La Federación Gráfica Bonaerense acordó con las cámaras del sector un aumento salarial de %11,93 para el trimestre abril-junio, acuerdo que la Secretaría de Trabajo se niega a homologar. Lo mismo ocurre con la paritaria de Comercio, en donde el SEC arregló con la parte empresaria un 5,4% en tres tramos, que llevaría el básico con presentismo a unos modestos \$1.123.000. El ministerio de Capital Humano sacó un comunicado en el que dice que no homologa la paritaria porque se trata de un "problema de orden público". Así, los campeones de la libertad le ponen palos en la rueda a acuerdos entre privados.

Las paritarias y el salario están en el

ojo de la mira libertaria. El ministro Sturzenegger participó a principios de mes de un evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, una entidad empresaria que reúne a lo más encumbrado de la gran burguesía loca. Allí el ministro planteó que los salarios se deben discutir por región y por productividad, planteando que el actual esquema de paritarias nacionales es una "rigidez" que atenta contra los empresarios. Puso como ejemplo el caso de Alemania, claro que sin especificar el monto de los salarios en aquel país. Sumando ataques, el mes pasado la Corte Suprema desconoció la vigencia del Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la prioridad de los trabajadores para cobrar indemnizaciones en caso de quiebra de una empresa. Según el fallo del máximo tribunal, ahora serían ARCA y las agencias recaudadoras de provincias y municipios las que tendrían prioridad por sobre los trabajadores.

Todo esto sucede en el marco de crecientes despidos, tanto por cierre de fábricas, de recortes en el Estado o de privatización de empresas públicas. Y si bien la tasa de desocupación -%6,4 al final del año pasado- no es tan alta comparada a otros momentos de crisis, la pérdida de trabajos formales se compensa con el crecimiento de la informalidad, con lo que crece la pobreza entre personas que tienen trabajo.

Hay que impulsar el protagonismo de los trabajadores en la pelea popular, rodeando las luchas en curso, haciendo punta ahí en donde sea posible, y buscando una confluencia que se exprese en una coordinadora de las luchas hacia el paro activo nacional, superando el límite que las conducciones burocráticas le imponen a la pelea obrera.

Valeria Casas

Acindar en lucha por el salario

Durante abril la junta interna de Acindar y los trabajadores del sector impulsaron paro, carpa y asamblea en puerta de fábrica, junto a la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica. Fruto de esta lucha se logró un acuerdo paritario con el directorio de la empresa para indexar los salarios a la inflación por INDEC.



El acuerdo fue logrado ante el recule de la patronal, frente al inminente llamado a paro dentro de la planta. Alcanza a los trabajadores efectivos y a los de dos empresas tercerizadas de la rama 21, quedando por fuera los tercerizados de la rama 17.

La situación es distinta para el resto de los trabajadores metalúrgicos. La UOM nacional venía de una serie de negociaciones fallidas con la Cámara Argentina del Acero, en las cuales la patronal ofreció un magro 2% para abril como cierre de la paritaria 2024-2025, y un 1% de suba mensual para mayo y junio como apertura del próximo período paritario. La bronca en el sector no tardó en estallar y el paro nacional parecía ser un hecho, pero el gobierno rápidamente dictó la conciliación obligatoria durante 15 días para ganar tiempo. Este aumento marca la cancha en favor del reclamo salarial y es una oportunidad para hacerlo valer frente a la próxima negociación con la cámara patronal. Lo cierto es que Grupo Ar-

celorMittal tuvo que retroceder frente a un gigante con voluntad de acero y con mucha más historia. Pese a las dificultades de peso que atravesamos los trabajadores y el movimiento obrero organizado actualmente en materia de organización gremial, la UOM de Villa y particularmente los compañeros de Acindar saben ser ejemplo de cómo llevar la pelea no solo para los siderúrgicos, sino para el conjunto de los trabajadores de la región.

Un trabajo con historia

Actualmente la empresa Acindar está controlada casi en su totalidad por ArcelorMittal, firma de origen indio actualmente radicada en Luxemburgo que tiene el 95% de las acciones. Es la misma empresa que en el '76' lo tuvo a José Alfredo Martínez de Hoz como director, hasta que iniciado el golpe e instaurada la dictadura genocida, pasó el a ser el ministro de economía a nivel nacional.

Acindar y Villa tienen historia. Historia que en estos últimos meses estuvo a flor de piel uniendo en una misma lucha a "viejos y nuevos" con la causa del Villazo que actualmente está en un desarrollo avanzado. La llama encendida por la experiencia de la Lista Marrón de la UOM sigue teniendo peso en las nuevas generaciones, experiencia que contó con el decisivo aporte de Vanguardia Comunista (hoy PRML) en la organización de gran parte de las bases que hoy explican su fortaleza.

Como parte de la decisión del partido de ligar de manera profunda el clasismo sindical con las ideas de la revolución para encolumnarse detrás del esquema de salida insurreccional, Mario Geller se incorporaría al Frigorífico Swift para terminar, en 1970, constituyéndose en uno de los tres miembros de un Comité de Lucha que, al frente 5.000 trabajadores y en medio de una Huelga General, expulsó a la burocracia peronista de Servalli de la dirección del principal sindicato de Rosario; luego y al ser despedido de esta fábrica, en tiempo de la dictadura de Onganía se convirtió en el cuadro organizador de la Huelga de Acindar del '71. El trabajo de vio fortalecido por más compañeros y camaradas que fueron ganados por esa idea y el fruto se vio reflejado con la construcción de la agrupación GODA -Grupo Obrero del Acero- que fue el origen de la propia experiencia de la "Lista Marrón", posteriormente encabezada por Piccinini.

Las tesis iniciales que habían empujado al partido hacia las principales fabricas y cordones industriales como Córdoba, Gran Buenos Aires, Rosario y Villa, fueron corroboradas en la práctica por el Cordobazo, Rosariazo, etc., que posteriormente culminaron con la derrota del gobierno dictatorial

de Onganía. Aquella generación fue parcialmente derrotada con la desaparición y la muerte impuesta por la dictadura genocida del '76' servil al plan económico de Martínez de Hoz. Pero las ideas siguen vigentes y la derrota en este campo es algo que al enemigo le cuesta asegurar. En tiempos de democracia tutelada y de sindicalismo limitado a reivindicaciones elementales y acuerdos a la baja, el desafío por ligar a lo mejor de la vanguardia obrera y gremial con las ideas de la revolución para terminar con la dependencia y los grandes problemas del país, es hoy una necesidad más vigente que nunca. Un presente de lucha

Los esfuerzos invertidos y que muchas veces costaron sangre y la pérdida de importantes compañeros que en diferentes momentos se hipotecaron en esta causa claramente no fueron en vano. La UOM de Villa y principalmente los compañeros de Acindar lo demuestran con esta conquista que, por más que no alcance para resolver la tan diezmada economía de las familias siderúrgicas, lo que hace es validar una vez más un modelo, y permite la posibilidad de que ahora, frente a la inminente negociación entre que va a tener como protagonistas a Furlan por la UOM y a la Cámara del Acero, el contagio entre los compañeros del ejemplo más reciente de la experiencia de la UOM de Villa y de los compañeros de Acindar empuje una vez más para avanzar hacia pelear por resolver las necesidades de fondo que tenemos los trabajadores.

Julían Amaya



Jornada de lucha territorial

Una importante movilización de más de 40 organizaciones piqueteras y territoriales se desarrolló en la Secretaría de Trabajo de la Nación, en el marco de la jornada nacional convocada por el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha, la UTEP y el Frente Barrial de la CTA. La CUBa-MTR fue parte activa de esta jornada.

A pesar del desproporcionado operativo de seguridad montado por fuerzas federales y de la Ciudad, la manifestación cortó dos carriles de la Avenida Alem. Los puntos que encabezaron el reclamo fueron el aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, la ampliación del programa, la continuidad del Monotributo Social y la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.

Por decisión del Ministerio de Capital Humano, el Salario Social Complementario ("Volver al trabajo") quedó desenganchado del Salario Mínimo Vital y Móvil, estando al día de hoy \$78.000, una suma increíblemente miserable con la que tienen que sobrevivir más de 5 millones de compañeras y compañeros. Además, el Ministerio sacó el monotributo social, lo que dejó sin cobertura a un millón de familias, y discontinuó la entrega de alimentos.

La convocatoria concluyó en Plaza de Mayo, dejando testimonio de que en las barriadas la lucha sigue, por más golpes que haya pegado este gobierno enemigo del pueblo.

Corresponsal

Otra vez Vicentin

El 30 de abril por la noche se encontró en el puerto de Vicentin en San Lorenzo -provincia de Santa Fe- un barco con media tonelada de cocaína. La noticia apareció el 1° de mayo en los portales de noticias e hizo que la ministra Patricia Bullrich tenga que cambiar su agenda y urgida por lo repentino del hallazgo, se acercara a San Lorenzo para la foto.

La noticia fue impactante pero no debiera ser sorprendente, teniendo en cuenta el prontuario de esta empresa manchada por antecedentes de este tipo, así como estafas a productores, falsas quiebras, etc.

De momento el único detenido es Jonathan Caputero, que quedó con prisión preventiva. Se trata de un cocinero filipino de 50 años que trabajaba en un buque, había recalado previamente en aguas cercanas a Montevideo antes de arribar a San Lorenzo y, tras su paso por el cordón industrial, tenía previsto volver a la terminal uruguaya con destino final en Ámsterdam, Países Bajos. Caputero se presentó como arrepentido ante la justicia, y por consejo del abogado va a colaborar con la investigación para atenuar su pena. Quizás lo más interesante comienza a partir de sus declaraciones, cuando manifiesta que el contacto narco le decía "que no tenía que preocuparse porque em-

barques como estos en San Lorenzo se hacen continuamente, con una frecuencia de dos o tres veces al mes, sin ser detectados".

En la anterior edición de *no transar* marcábamos cómo el gobierno nacional busca a partir de un decreto terminar con la marina mercante de bandera nacional y posibilitar que embarcaciones con el total de su tripulación extranjera manejen los navíos en nuestras costas. Que ya no haya libreta otorgada por parte de la prefectura habilitando al trabajador marítimo, entre otras desregulaciones. Si pensamos además en el contexto de disputa interimperialista que atraviesa el capitalismo actual, y si recordamos por ejemplo las declaraciones de Laura Richardson -jefa del Comando Sur de los EEUU- sobre las intenciones yanquis para la región, vemos que el problema es mucho más grave.

No es casual la intención de dejar de tener control sobre los barcos que van por el Paraná. Por un lado son los barcos que sacan el 80 % de la producción nacional. A su vez también está en juego el mercado ilegal como el de estupefacientes que no deja de crecer desde nuestras costas, y más allá de los circos que arman para decir que lo están combatiendo, todos sabemos que en realidad los sectores de poder y

las fuerzas de seguridad conviven con los grupos narco.

No es menor que la media tonelada de cocaína haya sido encontrada porque el capitán del barco hizo la denuncia, y no porque un control de la aduana o algún otro organismo de seguridad lo haya descubierto. Bullrich y los suyos se sacaron la foto con la media tonelada porque hubo una denuncia dentro del barco, no porque el Estado controle. La declaración del único detenido hasta el momento, en carácter de colaborador, sobre los dichos de los narcos, confirma que es un sistema ya aceitado el que está funcionando en las costas del Paraná.

Esto se suma a los hallazgos tiempo atrás de tonelada y media en galpones de la empresa Vicentin, en palet aquella vez. El narcotráfico opera tranquilo, de momento la ministra Bullrich está mucho más preocupada por reprimir a los jubilados los miércoles que por detener a los grandes narcos de la Argentina. A su vez que tanto el gobierno nacional como el provincial de Pullaro no dejan de golpear a los trabajadores estatales, que son quienes verdaderamente se la ven con las consecuencias del narcotráfico, en los centros de salud, hospitales, escuelas y demás instituciones que tienen que recibir las problemáticas de consumo, además de las con-

secuencias de la violencia de quienes están implicado en la comercialización de estupefacientes.

La tormenta es perfecta, pero claramente no es obra de la naturaleza: está pensada por el gobierno, que no tienen miramientos en hacer sufrir al pueblo. La verdadera batalla al narcotráfico se da con políticas de empleo digno, defendiendo y poniendo en marcha la marina mercante, controlando el comercio exterior que hoy está en manos de monopolios locales y extranjeros. Garantizando políticas de salud y educación que contengan a los jóvenes, para que no recurran a los narcos como salida para su vida.

En este momento lo principal es organizarnos y dar la pelea para que la marina mercante no desaparezca, para que se recupere el comercio exterior y para que este gobierno cipayo y entreguista se vaya lo antes posible.

Alexander Kan

Cultura

La rebelión. Historias del Cordobazo

A 56 años del Cordobazo, la histórica pueblada obrero - estudiantil que sacudió a la dictadura de Onganía en mayo de 1969, la memoria de aquella rebelión se reactualiza en clave gráfica gracias a la historieta "La rebelión. Historias del Cordobazo", la novela gráfica de Ian Debiase publicada por Hotel de las Ideas.

Esta obra de 144 páginas publicada el año pasado no se limita a narrar los hechos desde una perspectiva "heroica". El autor se basó en entrevistas a protagonistas directos del Cordobazo, complementadas con una exhaustiva investigación documental para construir relatos ficcionales con una fuerte raíz testimonial. Debiase optó por una reconstrucción coral, dividida en doce episodios y un epílogo que recoge voces anónimas, gestos cotidianos y estrategias creativas que dieron forma a la revuelta.

Desde estudiantes que practican cómo lanzar una molotov hasta niños que enfrentan a la policía con figuritas de fútbol, las historias retratan la dimensión humana y colectiva de la protesta. El capítulo "La urraca", por ejemplo, imagina a Onganía despertado por un pájaro de mal agüero, en una escena que combina lirismo y crítica política.

Visualmente, la historieta destaca por su paleta de colores cálidos, que recrea la atmósfera tensa de aquellos días: noches incendiadas, madrugadas cargadas de humo y barricadas improvisadas. Los detalles -desde radios y cigarrillos hasta carteles callejeros- transportan al lector en la Córdoba de fines de los '60.

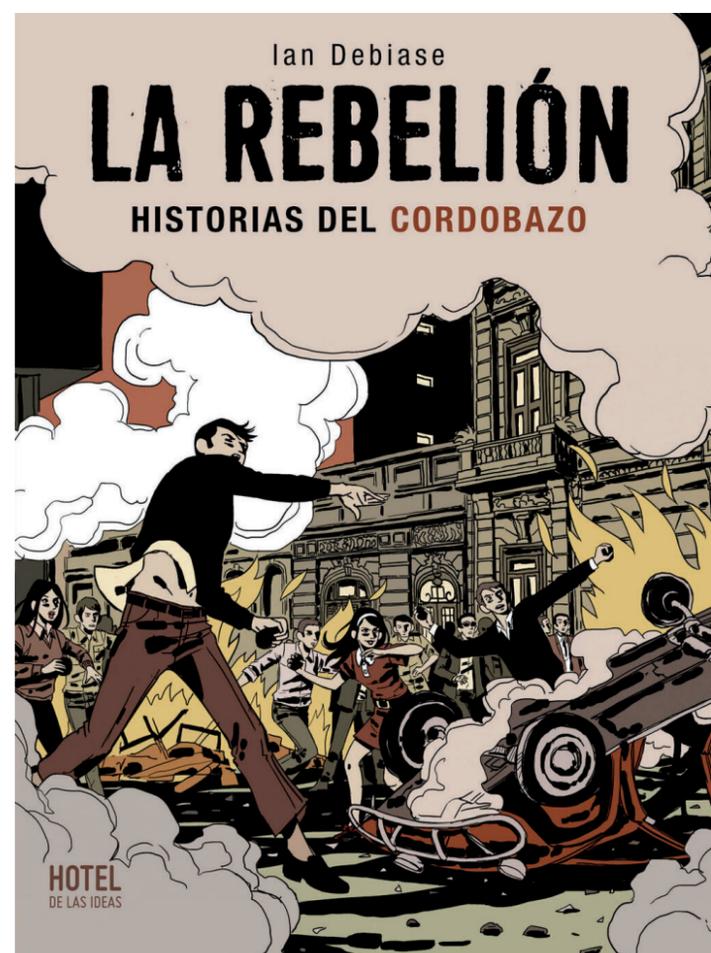
Debiase, conocido por su obra anterior sobre el Subcomandante Marcos, se inscribe en la tradi-

ción de la historieta política argentina, siguiendo los pasos de Oesterheld y Breccia. En *La rebelión*, no sólo documenta un hecho histórico, sino que también interpela al presente, preguntando -como en la cita del protagonista Ezra Winston de *Mort Cinder* que abre el libro-: "¿Está el pasado tan muerto como creemos?".

Si bien estuvo siempre presente en un sector, el reciente interés masivo por la historieta impulsado por la serie sobre *El Eternauta*, abrió las puertas a nuevas lecturas en este formato. *La rebelión. Historias del Cordobazo* se presenta como otra valiosa oportunidad para que las nuevas generaciones se conecten con un hito de la historia de la clase trabajadora argentina.

En tiempos donde la memoria colectiva enfrenta nuevos desafíos, esta novela gráfica se presenta como una herramienta poderosa para mantener viva la historia desde el arte y la sensibilidad.

Ignatius



Universidades Nacionales en la mira

Hace algunas semanas el Ministerio de Capital Humano anunció la aplicación obligatoria del Sistema Argentino de Créditos Académicos en todas las instituciones universitarias del país. Junto con esto fijó que todas las carreras de grado tendrán como plazo para modificar sus planes de estudios y compatibilizarlos con el nuevo sistema hasta el 1° de enero de 2027. Este anuncio, que significa la modificación de hecho de la Ley de Educación Superior, implica un nuevo avance en la reestructuración universitaria impulsada desde 2016 por la UN de Córdoba y nacionalizada en su momento por el macrismo.

Si en un primer momento la adhesión al Sistema por parte de las universidades públicas y privadas era voluntaria, ahora el gobierno libertario apostó a su profundización al tornarla obligatoria. En términos generales, los lineamientos del Sistema son una copia casi textual de lo firmado en 1999 en el Acuerdo de Bolonia, donde los países miembros de la Unión Europea delinearón un modelo universitario a la medida de los intereses de monopolios y multinacionales. Donde las carreras de grado perdieron su valor frente los postgrados pagos.

“La existencia de un Sistema Nacional de Créditos Universitarios contribuye a una mayor flexibilidad, al facilitar el reconocimiento de trayectos formativos y favorecer el intercambio y la movilidad de los estudiantes”. En concreto las carreras de grado y pregrado pasarán a medirse mediante el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE), una unidad medida sobre la cual se certificarán los conocimientos adquiridos. Asimismo, se estima que un año académico equivale a 60 unidades de CRE y cada una de estas unidades representa entre 25 y 30 horas de dedicación total del estudiante.

La aplicación de esta unidad de medición, que a simple vista parece un mero cambio formal de contabilidad, trae consigo serias modificaciones en el sistema universitario. Varias de las cuales se vienen implementando paulatinamente en distintas carreras de grado, principalmente Arquitectura e Ingenierías.

Con la aplicación del Sistema de Créditos se tiende a la eliminación de las materias propias de cada disciplina y se busca que ya no existan planes de estudios definidos, sino un trayecto que cada estudiante individualmente va escogiendo mediante la elección libre de Créditos que se encuentran en un “Banco de Materias” general. En primer lugar, esto provoca la tendencia a la eliminación de las Facultades como unidades académicas y organizativas. En segundo lugar, tira por la borda cualquier posibilidad de delimitación estatal sobre el perfil de egresado y con ello el rol que las distintas carreras universitarias tienen para aportar en el diseño de un modelo de país. Por contra partida, el libre albedrío que propone la flexibilización esconde por detrás un modelo

curricular que responde a un país hecho a la medida de unos pocos.

Junto con el Sistema de Créditos viene la creación de las carreras intermedias. Algo que ha sido desarrollado en los últimos años en la UNC a partir de las Tecnicaturas, que no es otra cosa que la asignación de un título luego del cursado de aproximadamente la mitad de la carrera de grado. Aquí hay varios aspectos a señalar. Por un lado, las llamadas tecnicaturas son una forma de dibujar el fracaso rotundo de un sistema universitario que a pesar de no cobrar “cuotas mensuales” resulta expulsivo para la gran mayoría de estudiantes, en donde solo logra egresarse el 23,7% de quienes ingresan.

Por otro lado, a mediano plazo se proyecta que las tecnicaturas sean las carreras de grado, dejando el resto del contenido que hoy se encuentra en las estructuras curriculares para formar parte de las especializaciones de postgrado. Con esto tendríamos carreras universitarias -como existen en Europa y Latinoamérica- de tres o cuatro años “gratuitas” y el resto formaría parte de otra etapa ya privatizada. Asistimos a ni más ni menos a la degradación de la Educación Superior argentina, centrada en la formación de semi profesionales más baratos a la hora de contratar. Esto se suma a la reforma laboral y previsional, con el objetivo incrementar el margen de ganancia empresarial, sobre la base de la disminución del costo laboral.

Finalmente, la nueva estructura supone la modificación del régimen de enseñanza y del régimen laboral docente. Se propone la adopción de un sistema de enseñanza híbrido, aplicando la virtualidad como forma de romper los lazos e intentar de evitar cualquier forma de organización entre trabajadores y estudiantes.

Línea de continuidad

Como dijimos hace varios años cuando surgió el Sistema de Créditos en nuestro país, esta reestructuración del sistema universitario no es ni “nueva” ni mucho menos un invento de los últimos gobiernos. Es la profundización de un proceso que comenzó en los `90 en nuestro país y que durante todos estos años ha sido sostenido.

Desde la sanción de la Ley de Educación Superior (LES) del menemismo, que seguía al pie de la letra lo establecido por los organismos internacionales de crédito, se legalizó la concepción de que la Universidad Pública tenía que adecuarse a las necesidades del mercado. Se hizo moneda corriente la promoción de pasantías gratuitas, el patentamiento privado de las innovaciones generadas por docentes y estudiantes, la modificación de los planes de estudio quitando cualquier tipo de formación social. El gobierno kirchnerista continuó con este camino. Su gestión fue la principal encargada



de aplicar la LES, mediante la acreditación de las carreras a la CoNEAU y multiplicó los convenios entre las universidades públicas y grandes empresas, afianzando la transferencia del conocimiento públicamente generado hacia los sectores más concentrados de la economía.

Con el macrismo la línea de continuidad se marcó desde un primer momento con el sostenimiento en el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología de Lino Barañao, un CEO del agronegocio que puso por delante la investigación por sobre la enseñanza y las ciencias duras por sobre las ciencias sociales. Promoviendo la mercantilización a través del auge de los patentamientos, que posteriormente son apropiados por el gran empresariado. Un ejemplo claro de ello fue la patente del trigo transgénico realizada por la Universidad Nacional del Litoral, que permitió sembrar trigo en zonas áridas y frías, es decir, extender la frontera agrícola.

Ya en 2018 el macrismo daba un paso adelante con su política universitaria con el impulso del Sistema de Créditos Académicos diseñado en la UNC. Lanzándolo incluso a nivel latinoamericano en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) realizada en julio de 2018 en la Ciudad de Córdoba. Posteriormente, con la llegada del gobierno de Alberto Fernández y la cuarentena, se avanzó con el proceso de virtualización de la enseñanza, realizando contratos millonarios con plataformas virtuales y culminando su gestión con la resolución de noviembre del 2023, mediante la que el ex Ministerio de Educación creó el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios. A la par de ello desde el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la mano de Roberto Salvarezza, se avanzó con criterio extractivista del litio y los hidrocarburos lo que en las Universidades Nacionales se tradujo en la instalación de parque industriales de grandes empresas en los propios predios universitarios.

Finalmente llegamos al gobierno de Milei cuyo primer año estuvo centrado

en aplicar la motosierra a todo el sector público y en dejarle rienda suelta al gran empresariado, principalmente al ligado con el capital financiero. En cuanto a las Universidades Públicas -además del ahogo presupuestario- este año, luego de la adhesión de la UBA y la UNR al Sistema de Créditos después de años de negarse a adoptarlo, ven el camino allanado para su aplicación obligatoria. Lo que implica una clara violación al principio de Autonomía Universitaria. Se intenta coronar así un ciclo comenzado en el menemismo que implica sintonizar a la Educación Superior con las transformaciones de los últimos años del capitalismo dependiente argentino, caracterizado por la reprimarización y extranjerización de la economía, la bicicleta financiera y la sobre/sub ocupación de la clase trabajadora.

Quedará por ver si el proceso culmina o no con la sanción de una nueva Ley de Educación Superior. Todo esto dependerá en gran parte de si aparece en la escena, así como lo hizo en numerosas ocasiones de la historia de las luchas populares de nuestro país, el movimiento docente-estudiantil universitario. En ese orden, la pelea que se abre no es solo por el financiamiento de las universidades públicas, sino por la disputa sobre el modelo de universidad a aplicar y más de fondo por cuál es el modelo de país que necesita hoy nuestro pueblo.

Martina Bas

A 10 años del primer Ni una Menos

Por un nuevo impulso a la lucha

Desde hace diez años levantamos la consigna **Ni una Menos**, el grito colectivo que surgió en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, como forma de denuncia contra la violencia machista, cuya manifestación más extrema son los femicidios. Hoy, una década después, frente a las políticas de ajuste y el ataque a nuestros derechos impulsados por el gobierno, tenemos que volver a gritar con fuerza y con el mismo espíritu de unidad: **"Ni una Menos: el Estado y los gobiernos son responsables"** llenando las calles de todo el país. Milei se tiene que ir.

Con anterioridad al 2015, los femicidios eran presentados por los medios de comunicación como "crímenes pasionales", como si se tratara de arrebatos amorosos que, de forma inexplicable, terminaban en el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja. Fue el movimiento feminista quien visibilizó que estos hechos no eran impulsos descontrolados ni casos aislados, sino la expresión más extrema de la violencia de género. Esto se tradujo en la incorporación de la figura de femicidio en el Código Penal en 2012, luego de años de debate. Sin embargo, no fue hasta 2015 que esta denuncia y la lucha contra los femicidios adquirieron un carácter verdaderamente masivo. El grito de Ni una Menos no solo se extendió por toda la Argentina, sino que también inspiró y movilizó luchas en otros países.

Dos años antes el femicidio de Ángeles Rawson en 2013, había tomado estado mediático y generado una importante conmoción social, situación similar a los femicidios de Lola Chomnalez, y Melina Romero en 2014. Ese año en el Encuentro de Salta, destacábamos el crecimiento de la irascibilidad social contra los femicidios y fue el de Chiara, el 10 de mayo de 2015 el que tuvo la particularidad de sacarla a la calle. Si bien el femicidio se cometió en Rufino, un pequeño pueblo al sur de Santa Fe, y era el décimo ocurrido en la provincia en lo que iba del año, tomó estado público por la acción de su familia y amistades que conmocionando a todo el pueblo se manifestaron denunciando la crueldad del asesinato, empalmado con el hartazgo que se estaba gestando.

A menos de un mes un grupo de periodistas convocó a la primera movilización con el lema Ni una Menos, siendo histórica por el nivel de participación: más de medio millón de personas salimos a las calles en 80 ciudades del país. En Buenos Aires más de 300 mil personas nos movilizamos frente al Congreso. Los números que empezaron a salir a la luz eran escalofriantes: en el país se cometía un femicidio cada 24hs. Estuvimos presentes junto a miles de mujeres que empezaron a reconocerse en un movimiento que no solo abrazaba el dolor generado por la violencia machista, sino que también llamaba a la lucha callejera para enfrentarla. Destacamos el accionar del pueblo de Rufino, para rescatar los puntos que muchas veces hacen avanzar los procesos de lucha. Para ese entonces aún gobernaba el kirchnerismo. Un año después en 2016, ya con Macri en la presidencia, el brutal femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata y la bronca que despertó, dio lugar a lo que se llamó el "Primer Paro de Mujeres", empujando al alza al movimiento refiriéndose como un espacio de lucha contra el gobierno. Otros femicidios como el de Aracelli Fu-

lles en 2017, en los que como en el caso de Lucía, las familias salieron a denunciar al Estado y los gobiernos, señalando la inoperancia o el encubrimiento por parte de la policía y del poder judicial, contribuyeron a abrir debates en asambleas masivas, sobre el carácter de clases de la lucha y las responsabilidades políticas implicadas, que muchas organizaciones ya veníamos dando y en el estábamos particularmente enfocadas discutiendo contra las ideas posmodernas que predominaban. Empezó a tomar más cuerpo la conjunción con el colectivo LGBTIQ+. Así, el movimiento de mujeres y diversidades fue creciendo no solo en masividad, composición y reconocimiento social, sino que también se configuró atravesado por una heterogeneidad de organizaciones políticas, que daban lugar a avances o retrocesos en los debates.

A pesar de las diferencias, se sostuvo un eje común: el esfuerzo por construir unidad para enfrentar al gobierno de Macri, que como organización siempre sostuvimos. Los debates permitieron que de exigir "Ni una Menos", como la generalidad que logró convocar a miles, se logre visibilizar la responsabilidad estatal en los femicidios, poner en las calles masivamente la lucha por el aborto legal con miles de jóvenes siendo parte de la marea verde, hasta exigir, en 2018, que "la deuda era con nosotras y no con el FMI", repudiando el fraudulento acuerdo del macrismo con el Fondo. Ese año el documento de la CABA, llevaba como principal consigna "Sin aborto legal no hay Ni una Menos. Contra el FMI, el ajuste y la deuda", y con el mismo espíritu se formularon consignas en otras ciudades, sosteniendo nuevamente movilizaciones masivas.

De esta forma, el movimiento de mujeres y diversidades anclado en los sectores populares, supo tomar en sus manos la lucha contra el ajuste, denunciando que siendo las más pobres, precarizadas y desocupadas, somos las más afectadas en momentos de crisis, y que se necesita tener autonomía económica para salir del círculo de la violencia. Cobró mayor visibilización social cómo el peso de las tareas domésticas y de cuidado que históricamente recen sobre las mujeres influyen este punto. Al reclamo contra los femicidios, los travesticidios, los crímenes de odio y por el aumento del presupuesto destinado a políticas de prevención y asistencia ante la violencia de género y la legalización del aborto, se sumaron con fuerza otras demandas como el aumento de salarios, planes sociales y jubilaciones, el acceso a trabajo genuino y el derecho a una vivienda digna. Hubo Encuentros de Mujeres y Diversidades con picos de masividad y el debate, la militancia y la pelea por nuestros derechos se hizo presente en los espacios de trabajo, escuelas y barrios.



En el año 2020, pandemia mediante, el gobierno del Frente de Todos logró institucionalizar la lucha de la mano del feminismo peronista y el movimiento perdió fuerza luego de ganar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto más allá del esfuerzo de muchas organizaciones que sostuvimos la pelea callejera contra el ajuste y la convalidación del acuerdo con el FMI, junto a la falta de presupuesto para el nuevo Ministerio de Mujeres Género y Diversidad, entre otros puntos, en los que advertíamos que, ante la desmovilización, la derecha se había dispuesto a avanzar poniéndonos como blanco. La impunidad llevó a que se conforme en esos años la Asamblea de Familiares Víctimas de Femicidios, recordando la lucha por justicia por Lara Ruedas y Cecilia Basaldua entre otras jóvenes asesinadas, y por el crimen de odio contra Tehuel. Familias con las que junto a otras organizaciones construimos jornadas del #3J en la Plaza de Mayo durante este período, mientras el gobierno hacía festivales. Particularmente en esta etapa debatiendo y dando pelea contra la opresión de género y la explotación de clase, conformamos los talleres de *Juntas nos Hacemos Fuertes* junto a las compañeras de la CUBa-MTR.

Hoy a 10 años del primer grito de Ni una Menos, aún con muchos debates y tareas inconclusas como movimiento en general, nos interesa rescatar su poder de convocatoria callejera y la unidad que supimos construir contra la derecha, los debates masivos por nuestros derechos volcados en enormes movilizaciones con consignas que, no solo destacaban la lucha contra la violencia machista, sino también contra el ajuste, el FMI y por mejorar nuestras condiciones materiales de vida.

Con el gobierno libertario haciendo daño a cada paso, tenemos que retomar ese camino, profundizando los debates con la perspectiva de que Milei se tiene que ir cuanto antes, además de construir la fuerza social capaz de imponer una salida popular a la crisis. Afilando su perfil rebelde tenemos que llevar esta discusión al movimiento de

mujeres y diversidades para que tome cuerpo. Y esto es urgente. El año 2015 cerró con 286 femicidios. Durante estos años, las estadísticas y el carácter de los femicidios prácticamente no variaron: se comete uno entre un día o día y medio, la mayoría son ejecutados por parejas o ex parejas de las víctimas, en sus domicilios y en muchos casos hubo denuncias y el Estado no estuvo a la altura de las respuestas. En la actualidad hay un dato a tener en cuenta: se está empezando a observar un crecimiento en las estadísticas. El año pasado se contabilizaron 300 femicidios y en lo que va de este 102 y se duplicaron los intentos. Motosierra mediante, tras el cierre y los recortes de presupuesto en áreas de género y diversidad, los discursos de odio y el ataque a nuestros derechos de la LLA, ciento de mujeres están en riesgo de vida y escasean los recursos para evitarlo, riesgo al que también está expuesto el colectivo de la diversidad, a un año de la exigencia de justicia por el triple lesbicidio en el barrio de Barracas en la CABA. El ajuste que golpea de conjunto al pueblo trabajador, esta particularmente destrozándonos el bolsillo y el nuevo acuerdo con el FMI, solo va a empeorar la situación, con reformas laborales y jubilatorias regresivas que profundizarán la histórica precarización que arrastramos. Arrancamos el año con la enorme movilización del #1F, seguida por la del 8 de Marzo. Pero se impuso la dispersión al intento a la unidad y esto solo nos perjudica.

Tenemos que impulsar asambleas que construyan un #3J, que con consignas claras contra Milei, levante otra vez al movimiento de mujeres y diversidades y en unidad salga a luchar junto a otros sectores sumando su fuerza para derrotar en las calles a este gobierno reaccionario. Vamos por realizar talleres y actividades previas para seguir impulsando la construcción de un movimiento de mujeres y diversidades combativo que esté dispuesto a dar esta pelea.

Julia Quinteros

A 80 años del fusilamiento de Mussolini

Justicia popular, la flor del partisano

Se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, que en Europa culminó con la toma de Berlín por parte del Ejército Rojo el 8 de mayo de 1945, y en el Pacífico terminó en agosto con los bombardeos nucleares asesinos de EEUU sobre Hiroshima y Nagasaki. Días antes de la victoria soviética en Alemania, el 28 de abril, la resistencia italiana fusilaba a Benito Mussolini, página gloriosa de la lucha antifascista que reseñamos en esta nota.

Ascenso y crisis del fascismo

Mussolini llegó al poder en septiembre de 1922 con la complicidad del empresariado italiano y del rey Víctor Manuel III, que vieron en su movimiento fascista un proyecto eficaz para ponerle freno a los trabajadores y en particular al comunismo. Contra los vaticinios de la burguesía europea, la URSS consolidaba su poder. La clase obrera venía de la experiencia de las tomas de fábricas y los consejos obreros, con la influencia en su seno del Partido Comunista. Frente a esto el fascismo ofrecía respeto por la propiedad privada y orden social. Todo ello apoyado en una represión implacable, tanto estatal como parapolicial.

Su nacionalismo se reivindicaba continuidad del antiguo Imperio Romano, ofreciendo una base de ideas para el expansionismo en la puja por el reparto de los mercados y las colonias. En África, Italia reforzó su presencia en Libia y en Eritrea, Etiopía y Somalia. En Europa, ocupó Albania en 1939 e invadió Grecia al año siguiente. Entre 1936 y 1939 envió apoyo a Franco durante la Guerra Civil Española.

La debacle del fascismo comenzó con su entrada en la guerra mundial, atando su suerte a la de Alemania. Mussolini era refractario a participar de ella; sin embargo el alto mando fascista analizó que la misma ya estaba irreversiblemente inclinada en favor de los nazis. Error grueso.

La guerra agotó a una Italia que no estaba preparada ni económica ni militarmente para tal aventura. La ofensiva sobre dominios británicos en África de 1940 terminó al año siguiente con la pérdida de sus posesiones en el este del continente. En paralelo sufrió un revés en Grecia, de donde debió retirarse. En la URSS, fue parte de la derrota en Stalingrado.

En medio de un creciente descontento popular, el desembarco anglo-norteamericano de julio de 1943 en Sicilia selló la suerte de "il duce": el rey Víctor Manuel III ordenó su destitución y detención. El mariscal fascista Badoglio fue nombrado presidente provisional; el nuevo gobierno firmó el armisticio con los aliados y le declaró la guerra al Eje. Días después de su detención, Mussolini fue rescatado por un comando nazi

y llevado al norte del país, ocupado por tropas alemanas, en donde instauró lo que se conoció como República de Saló, intento de continuidad del régimen fascista, esta vez con absoluta tutela de los nazis.

La resistencia partisana

Desde la década del '20 hubo experiencias de resistencia al fascismo, débiles y aisladas. La resistencia cobró carácter de masas a partir de 1943, luego de la victoria soviética en Stalingrado, que marcó el retroceso militar de los nazis y abrió un auge antifascista en Europa.

En paralelo al gobierno de Badoglio, en septiembre se formó el Comité de Liberación Nacional, con sede en Roma, y el Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia, que operaba en el norte controlado por los fascistas. El CLN hizo un llamado a la resistencia armada. En dos años, los combatientes bajo su órbita pasaron de unos 80.000 a unos 300.000. Las brigadas estaban formadas por distintos partidos políticos, desde liberales antifascistas hasta el PC. Los partisanos desarrollaban guerra de guerrillas y sabotajes. Esto se combinaba con la lucha obrera en las ciudades: la huelga de marzo de 1943 movilizó a unos 100.000 trabajadores en Turín, Milán y Génova; un año después, los huelguistas en el norte italiano ascendieron a 1 millón.

En abril de 1945 con la entrada de guerrilleros a las ciudades y el llamado a la huelga general, el día 25 el CLN tomó el poder en el norte de Italia, siendo una de sus primeras órdenes la detención y fusilamiento de dirigentes fascistas. Mussolini fue apresado por la brigada Garibaldi (dirigida por el PC) el día 27 mientras intentaba huir hacia Suiza. Fue fusilado al día siguiente junto a su amante y algunos dirigentes fascistas. Su cuerpo fue llevado a la Plaza Loreto de Milán, en donde recibió escarnio popular y fue colgado cabeza abajo.

Las brigadas y el problema del poder

Con el país dividido en dos -ocupación anglo-norteamericana al sur y ocupación alemana al norte- el Estado italiano estaba virtualmente disuelto. En ese marco, a través de las brigadas el pueblo tomó en sus manos la resolución

del problema militar en la lucha contra el fascismo.

El CLN era su dirección política. Dentro de esa alianza policlasista era notorio el peso del PC, por su influencia, el mayor tamaño de sus brigadas y su capacidad de operación. La presencia de los comunistas en la lucha popular armada generó desconfianza en los aliados occidentales, que retaceaban ayuda a la resistencia. Para coordinar las acciones militares que terminaron de derrotar a la República de Saló, EE.UU. y Gran Bretaña pusieron como condición que las brigadas se desarmaran luego de la victoria sobre el fascismo.

Esto desató un debate entre los comunistas, ya que había quienes eran contrarios a entregar las armas, renunciando con ello a la lucha por el poder. No sin polémica, se terminó imponiendo el criterio de Palmiro Togliatti, principal dirigente del PC, respecto de que derrotado el fascismo había que avanzar en la recomposición del Estado italiano y en la formación de una república democrática.

La opinión de Togliatti coincidía con la política exterior de la URSS, cuya línea estratégica era evitar cualquier confrontación directa con las fuerzas británicas, en la hipótesis de que ello podía provocar el comienzo de la tercera guerra mundial (entre capitalismo y comunismo) antes del final de la segunda.

En este punto se suele hacer referencia a los acuerdos de Yalta, que pasaron a la Historia como un "reparto del mundo" entre la URSS, EEUU y Gran Bretaña.

Esto debe ser tomado con cuidado. Las áreas de influencia no fueron el fruto de un "intercambio de figuritas", sino el resultado del despliegue militar de cada país por un lado y la intervención de los comunistas locales por otro: así se dieron los casos de Yugoslavia y Polonia.

En el PC italiano se impuso una visión conservadora del proceso de post guerra, que se vio profundizada en los años siguientes. Como ministro del gobierno, en 1946 Togliatti redactó un decreto de amnistía para crímenes cometidos por fascistas que llevó su nombre (la "amnistía Togliatti"), avanzando sin retorno en la línea de colaboración de clases que caracterizó al PCI desde el final de la guerra hasta su disolución en los '90.

80 años de una gesta

Junto al impetuoso avance del Ejército Rojo, la resistencia partisana fue una parte clave de la inmensa movilización obrera y popular para derrotar al nazismo y al fascismo. El fusilamiento de Mussolini fue un acto de justicia para con el responsable principal de la represión, la persecución, la censura, la segregación y demás crímenes cometidos contra el pueblo italiano y la población de otros países europeos y africanos. Fue además un símbolo de cuál es el final que le espera a los enemigos del pueblo cuando las masas ejercen el poder con las herramientas adecuadas.

Facundo Palacios



Nada nuevo en la Historia

"La lucha por el poder no es, como decía Mao, tejer o bordar. La lucha por el poder es una acción de fuerza, violenta. Pero no porque seamos violentos. El problema es que estamos convencidos de que para una Argentina liberada y camino al Socialismo; para una Argentina donde se expropié a los monopolios, a las multinacionales y a los banqueros; y la economía esté al servicio de los trabajadores y el pueblo; va a haber que destruir el viejo poder de las clases dominantes. Tampoco es nada nuevo en la Historia."

Manuel Malvicino, secretario político de nuestro partido entre 1995 y 2012

¿Qué subyace a los combates entre India y Pakistán?

En Cachemira, la tensión entre India y Pakistán ha aumentado significativamente tras un reciente ataque a turistas en la zona administrada por India, causando 26 muertes. India acusa a Pakistán de respaldar a militantes en la región, mientras que Pakistán niega cualquier implicación. Los ataques han provocado una escalada bélica, incluyendo bombardeos y fuego de misiles. Sin embargo, prontamente, se ha anunciado un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Tras una convivencia en permanente tensión, las relaciones entre India y Pakistán se deterioraron rápidamente luego de un atentado que provocó 26 muertes el 22 de abril pasado en un centro turístico ubicado en Palaham, la región india de Cachemira, zona en permanente disputa desde la independencia de ambos países luego de casi 200 años de dominio imperial (desde 1757 hasta 1947).

Pese a este incidente, auto adjudicado por el Frente de Resistencia, una organización pretendidamente ilegal en Pakistán, numerosos especialistas en temas internacionales no dudaron en cifrar la raíz del conflicto en las consecuencias del régimen colonial británico en el sur de Asia, consideración avalada por cuatro guerras recientes entre India y Pakistán.

Conflicto con historia

Ocurre que la "India británica", territorio bajo el dominio directo de la corona inglesa y una serie de Estados principescos títeres que incluía las actuales India, Pakistán, Bangladesh y Birmania, considerados la "joya de la Corona" debido a su importancia económica, política y estratégica, llegó a su fin en 1947, cuando tras la independencia el territorio fue dividido en India y Pakistán.

Dicha independencia no fue inocua ya que vino parida por una "bomba de tiempo": Cachemira, región que los ingleses no delimitaron adecuadamente antes de abandonar la ex colonia, a fin de provocar una permanente zona de inestabilidad, es decir, una balcanización entre hindúes y musulmanes ubicados del lado indio y pakistaní de dicha región.

Vale señalar que la "joya de la Corona" fue el resultado directo del expansionismo mercantil británico a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales, empresa comercial que tuvo un profundo impacto en la India al anticipar la expansión militar, el establecimiento de un sistema de gobierno colonial transferido luego a la corona tras la rebelión de los cipayos, y el monopolio del extractivismo y el comercio

textil, aunque también de las especias y del opio a la China, que generaron grandes ganancias para la compañía y también desequilibrios de la economía que provocaron hambrunas y el quiebre de las industrias locales.

Por estas razones el dominio británico fue fuertemente resistido por el pueblo indio, quien a lo largo del siglo XX desarrolló un movimiento nacionalista liderado, entre otros, por Mahatma Gandhi, en busca de la independencia del país la cual, finalmente, logró acabar con el dominio británico pero no con el legado de inestabilidad política y de choques en la región que permanentemente fueron alentados por diferentes potencias extranjeras.

Militarización creciente

El actual escenario de enfrentamientos entre India y Pakistán viene precedido de una fuerte militarización, incluida la tenencia de ojivas nucleares por parte de ambos países y de armamento de última generación provisto por China en el caso paquistaní, y de Rusia en el caso indio; fenómeno aprovechado por los observadores y asesores militares de la OTAN para ver en terreno el desempeño del nuevo armamento, como el que hizo posible el derribo de cinco aviones indios por parte de Pakistán: tres Rafale de origen francés, un MiG-29 y el "imbatible" SU-30 de origen ruso. Situación que, de más está decir, ha elevado el valor de las acciones de las empresas chinas fabricantes de armamento defensivo.

Esta situación está calando con preocupación en el seno de los BRICS, donde India comparte el liderazgo junto a Rusia y China, ya que Estados Unidos pretende aprovechar la misma para intentar un realineamiento.

La política de EEUU tras el atentado

Justo en el momento de la masacre de Palaham, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, realizaba una gira de cuatro días por la India junto a su esposa siguiendo instrucciones de Trump quien, como se sabe, pretende una alianza con



la India ante una eventual confrontación contra China, el adversario común de yanquis e indios.

Junto a esto hay un componente económico. India está recibiendo parte de los capitales occidentales y en particular los de EEUU que salieron de China tras la agudización de la guerra comercial y de aranceles. Es por eso que la gira de Vance busca encontrarle una salida política a la situación generada tras el arancel del 26% asignado por Trump a la India, más alto que el promedio mundial pero bastante más bajo que el 58% que le impuso a Pakistán.

De hecho, tras las escaramuzas fronterizas en Cachemira, Estados Unidos rápidamente apuntó a calmar los ánimos, razón por la cual prontamente se ofreció de mediador en un intento por lograr una tregua que evitara una nueva guerra de resultado riesgoso e imprevisible.

De modo similar Rusia, un importante socio de India como proveedor de armas y petróleo, también apostó a descomprimir la situación y mantener por ahora una postura aparentemente neutral.

Como contrapartida a la arremetida yanqui en la India, Pakistán permi-

tió que China instalase una base con hasta 4.500 efectivos en Gilgit-Baltistán, una zona de Cachemira reclamada por India que pone en curso de colisión a los tres países si India, finalmente, intentara tomar la región por la fuerza.

Además, China ya lleva invertidos 57.000 millones de dólares en Pakistán, en especial en el corredor económico China - Pakistán que pasa por Cachemira y llega a los puertos de Karachi y Dawar. En este último, "el gigante asiático" tiene una concesión para operar una base civil con potencial militar, por lo que China depende de la presencia de Pakistán en Cachemira para sostener este proyecto que le permite atenuar los efectos de un eventual bloqueo indio a las rutas marítimas que transitan por el estrecho de Malaca, lugar por donde pasa el 80% del crudo que China importa y el 60% de sus exportaciones.

En este clima de fluctuación hay sin embargo algo certero: el juego descajado de muchos actores en las sombras, en el contexto de exacerbación de la guerra comercial y la disputa por los mercados entre las grandes potencias.

Jorge Díaz